

320.983
H934 ds
2014
CA

a713514

E

CARLOS HUNEEUS

LA DEMOCRACIA SEMISOBERANA
Chile después de Pinochet



TAURUS

HISTORIA

EL CAMBIO DEL AUTORITARISMO A LA DEMOCRACIA

El cambio de régimen es una coyuntura crítica (Collier y Collier, 1991) durante la cual se redefinen instituciones y políticas, porque aquellas adquieren una enorme plasticidad, también se produce un realineamiento en las élites, que perduran en el tiempo y toman decisiones que definen las principales orientaciones del proceso político. Asimismo surgen liderazgos que adquieren un gran protagonismo, se crean nuevas relaciones de poder que influyen en la dinámica del proceso político, se expresan tendencias de evolución en la opinión pública que presionan a las élites a actuar en cierta dirección y se adoptan decisiones que producen efectos, algunos de los cuales van más allá de los objetivos deseados por los actores. Las decisiones adoptadas durante la coyuntura crítica definen las instituciones y las *policies*, y tendrán repercusiones en el desarrollo democrático. Los buenos resultados iniciales que se perciben en las transiciones democráticas producen el efecto *path dependence*, efecto que genera la continuidad de las decisiones que hicieron posibles esos buenos resultados y refuerza el liderazgo de los actores que las adoptaron y las aplicaron (Pierson, 2000).

La coyuntura crítica que llevaría a la democracia en Chile, que adquirirá el carácter de semisoberana, fue iniciada por la crisis económica de 1983¹, producto del desplome del sistema financiero². Ante esta crisis, que provocó una masiva protesta ciudadana, el régimen adoptó una política de liberalización, la «apertura»³, que produjo profundos cambios en el gobierno autoritario, que fueron hábilmente aprovechados por la oposición a Pinochet, y que además suscitaron condiciones favorables para un cambio de régimen. Estos cambios ampliaron

la arena política en forma radical, pues abarcaron desde la autorización del funcionamiento de los partidos y de los grupos de interés, hasta el levantamiento de la censura a la prensa. Todo ello expandió la participación política de la población y debilitó los recursos políticos del general Augusto Pinochet para mantenerse en el poder a través de la regulación sucesoria —que consideraba un plebiscito con el carácter de elección no competitiva de presidente de la República—, pues sus partidarios civiles se dividieron mientras la oposición se fortaleció.

La coyuntura crítica tiene un nuevo momento decisivo en el plebiscito del 5 de octubre de 1988, pues fue una oportunidad en la cual la oposición debió adoptar decisiones estratégicas, especialmente de liderazgos y orientaciones programáticas y estilos de acción política, que dominarán la acción de los gobiernos democráticos.

Estos años de intensa movilización política dieron lugar a decisiones que marcarán el curso del proceso democrático y ayudarán a definir algunos de los componentes de la democracia semisoberana. La política del consenso será promovida inicialmente en esos años, aunque sin lograr alterar las decisiones del régimen militar, y apunta a que los sindicatos apoyen a la autoridad económica, sin recurrir a movilizaciones. Al mismo tiempo, la lógica de los expertos amplía su campo de acción desde la economía a la política, con motivo de la campaña del NO en el plebiscito de 1988. Esta lógica experta persigue aminorar el protagonismo de los partidos y de los políticos profesionales. Aun cuando hubo ciertos logros en el desarrollo político, como el mayor pluralismo de la prensa escrita, estos no se sostendrían en el tiempo.

Visiones elitistas del cambio de régimen

La rapidez y relativa facilidad con que se desarrolló la transición del autoritarismo a la democracia a partir del triunfo del NO en el plebiscito ha llevado a desconocer la complejidad del

tránsito, como si este se hubiese limitado a la competencia electoral. Desde esta óptica, la victoria sobre Pinochet en las urnas habría sido posible por la acción de un grupo reducido de perspicaces sociólogos y publicistas, mayoritariamente ex MAPU, que habrían diseñado y llevado adelante la campaña electoral de la oposición, en la cual sobresalió la calidad de su propaganda televisiva (la Franja del NO) empleada en las tres últimas semanas de la campaña electoral, que habría provocado la amplia movilización electoral⁴. En esa perspectiva, la competencia electoral se presenta fuera del contexto político, como si hubiese comenzado cuando los comandantes en jefe de las FFAA. y el general director de Carabineros nominaron al general Pinochet como candidato el 30 de agosto del año 1988. La democracia, de acuerdo a esta interpretación, habría llegado desde arriba, por la hábil labor de un puñado de personas y por la propaganda política. No se considera a los partidos, las organizaciones sociales, ni tampoco a una diversidad de instituciones, actores e intereses que intervinieron en el cambio de régimen. Esto incluye una ciudadanía interesada en la política y en la presencia de nuevos factores de poder surgidos tras la crisis económica de 1983, que empujó al régimen militar a su liberalización.

Esta visión elitista también se da para explicar la consolidación democrática. Ello habría sido posible gracias al desempeño de ciertas personalidades, que no son los presidentes de la República o los presidentes de los partidos, sino algunos políticos —ministros o parlamentarios—, los cuales, con gran inteligencia y habilidad, tomaron las decisiones que permitieron resolver las situaciones más difíciles que enfrentó la democratización.

Partidarios de la dictadura afirman, por su parte, que el establecimiento de la democracia fue el objetivo buscado por los militares desde muy temprano y la derrota del SÍ en el plebiscito habría sido un accidente en el largo esfuerzo de restablecer el orden pluralista⁵. Esto implica reescribir la historia, pues el régimen no buscó restituir una democracia pluralista. Buscaba, más bien, imponer la democracia «protegida y autoritaria» establecida en la Constitución de 1980, que se inauguraría luego

de un plebiscito que tendría el carácter de una elección presidencial no competitiva; es decir, Pinochet sería un candidato único, pudiendo el elector «aprobar» o «no aprobar» su postulación, y los partidos serían legalizados al terminar la «transición» de ocho años.

Esta visión de cambios «desde arriba» desconoce la incertidumbre que dominó a los dirigentes de la oposición —y a los observadores internacionales que concurren al plebiscito a verificar su validez— respecto del desenlace de la contienda electoral. Predominó en ellos el temor de que Pinochet no reconociera una eventual derrota⁶, e incluso se temió la posibilidad de un nuevo golpe de Estado para desconocer el resultado e impedir el fin del régimen militar y el retorno a la democracia en el plazo de un año. Este temor fue expuesto por el cientista político chileno-estadounidense Arturo Valenzuela y la periodista Pamela Constable (1988: 41):

Si llegara a ganar la opción del «NO», el resultado puede ser traumático. Las Fuerzas Armadas pueden interpretar la derrota como una amenaza directa a sus instituciones y como el intento de imponer un nuevo orden social. Con Pinochet gobernando un año más, él podría utilizar sus poderes draconianos para cortar a la disidencia y organizar elecciones en las cuales la izquierda no pueda participar. Con el apoyo de las Fuerzas Armadas no se puede descartar que Pinochet se sienta tentado a dar un nuevo golpe de Estado para defender los valores y los logros contra los destrozos de los políticos «irresponsables».

Aclarar las condiciones en que se produjo el cambio de régimen representa más que una precisión histórica. Es indispensable para comprender su naturaleza y alcances, especialmente la decisión de políticos y economistas de la Concertación de haber optado más por la continuidad que por la reforma del sistema económico, que ha tenido enorme importancia en definir las bases económicas de la democracia. En esos años se

definieron instituciones, se desarrollaron coaliciones al interior de las élites y se impulsaron liderazgos, todo lo cual contribuyó a definir a la democracia semisoberana. El caso de Chile confirma la generalización de Dankward A. Rustow (1970) en el sentido de que la transición a la democracia es un proceso largo, complejo y accidentado, que no se produce por decisiones «desde arriba», adoptadas por élites que actúan con autonomía del contexto político. Surge más bien como consecuencia de presiones «desde abajo», impulsadas por los partidos y organizaciones sociales que desencadenan un intenso conflicto político, con riesgos de escalamiento, que infunden el temor, tanto en actores del régimen como de la oposición, de perder lo alcanzado y que se produzca una polarización de alcances imprevisibles. A esto contribuían también las acciones armadas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), formado por el PC. Este temor empuja a todos a moderar sus acciones y buscar acuerdos «desde arriba», implícitos y explícitos, conducentes a una salida pacífica que desemboque en la inauguración de la democracia.

El cambio de régimen, por ende, no se reduce a una mera contienda electoral que gira en torno a la propaganda televisiva. Es un proceso bastante más complejo⁷, en el cual intervienen múltiples instituciones y actores, y no se define solamente por el resultado del plebiscito, porque, además, el general Pinochet mantuvo el liderazgo del proceso político y los grupos y personalidades civiles que le apoyaron enfrentaron unitariamente las elecciones presidenciales y parlamentarias de 1989 y defendieron la continuidad de aquel como comandante en jefe del Ejército, de la Constitución de 1980 y del sistema económico.

La crisis económica de 1983 y la política de la *apertura*

La coyuntura crítica que llevaría al fin de la dictadura y al establecimiento de la democracia semisoberana comenzó por la crisis económica de 1983, que llevó al régimen autoritario a

introducir importantes cambios institucionales y de políticas. Estas reformas producirían una fuerte expansión de la arena política, creando amplios espacios de acción que fueron ocupados por la oposición y llevarían a la derrota de Pinochet en el plebiscito de 1988. Es necesario analizar esta coyuntura porque en ella se tomaron decisiones que tendrán una enorme influencia en el perfil institucional y en el liderazgo de la democracia semisoberana.

Por primera vez, sectores de la población, sobre todo trabajadores, estudiantes y hasta dueñas de casa, salieron a las calles a protestar por la crisis económica, convocados por las organizaciones sindicales y los partidos desde el 11 de mayo de 1983, y desde entonces en meses sucesivos. Desde el principio los sectores movilizados plantearon demandas económicas, que luego evolucionarían a demandas políticas. Estas exigencias eran toleradas por el gobierno porque los costos de la represión eran extraordinariamente altos. El régimen enfrentó la protesta ciudadana con tres tipos de políticas, muy vinculadas entre sí⁸. En primer lugar, aplicó una dura represión con motivo de la protesta del 11 de agosto de 1983, movilizandoo a 18.000 soldados que actuaron con gran violencia, provocando decenas de muertos, centenares de heridos y detenciones masivas de personas. Esta acción tuvo un gran impacto político e hizo recordar la violencia empleada por los militares durante el golpe de Estado de 1973 y en los primeros días posteriores al 11 de septiembre, episodios que el gobierno quería hacer olvidar para dar facilidades a un cambio en el régimen hacia una «democracia protegida», liderada por Pinochet, y evitar la instauración de una democracia.

En segundo lugar, con motivo de esta protesta, el gobierno impulsó la llamada *apertura*, bajo la conducción del ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, político de gran experiencia⁹, quien asumió la cartera el 11 de agosto de 1983. Esta política de liberalización generaría un importante cambio en el orden político, pues permitió el funcionamiento de los partidos y los grupos de presión, en especial de los sindicatos, colegios

profesionales y federaciones estudiantiles, a lo que se sumó el regreso —aunque selectivo— de ciudadanos exiliados¹⁰, y la flexibilización de la censura de prensa. Esto último permitió la aparición de nuevos semanarios y diarios, y llevó a que los medios opositores ya existentes, incluso *El Mercurio* y *La Tercera*, ampliaran el contenido de la información política, dando a conocer las actividades de la oposición. La censura reducida produjo un drástico aumento de la información política e interés en la misma. Incluso los partidarios del régimen crearon partidos para no excluirse del proceso político; de esta forma surgieron la UDI y la Unión Nacional, que más tarde sería RN¹¹.

Los efectos de la *apertura* estaban muy lejos de las condiciones que consideró el régimen al definir la regulación sucesoria. La dictadura quería autorizar el funcionamiento de los partidos bastante más tarde, para impedir que la oposición tuviera tiempo para organizarse, y así favorecer la opción electoral del general Pinochet.

En tercer lugar, después de prolongadas vacilaciones, el gobierno encaró la crisis económica bajo el liderazgo del ministro de Hacienda, el ingeniero Hernán Büchi Buc (1985-1988)¹², quien impulsó cambios en las políticas que habían sido desarrolladas por Sergio de Castro, exministro de Economía y de Hacienda (1975-1982), líder de los Chicago Boys (Huneus, 2000 A).

La política de la *apertura* generó una gran participación de la ciudadanía en acciones de protesta convocadas por la oposición. Centenares de miles de chilenos se movilizaron, destacando dos actos masivos permitidos por el régimen en 1983 y en 1984. La oposición logró además una gran capacidad organizativa a través de los partidos, los grupos de interés y múltiples ONG. Esta organización le permitiría movilizar a millones de personas que se inscribieron en los registros electorales para votar en el plebiscito de 1988. Esta diversificación de las organizaciones y la activa participación de miles de chilenos en protestas crearon un escenario más complejo para la decisión del gobierno de recuperar el liderazgo del proceso político. Se dieron las condiciones que empujan a un país

hacia la democracia, según el teorema de Dahl (1971: 15-16), esto es cuando los costos para reprimir a la oposición para recuperar la estabilidad del régimen autoritario son más altos que tolerar la protesta ciudadana.

Con relativa celeridad se produjo un fuerte desarrollo de la sociedad civil. Los colegios profesionales y las federaciones de estudiantes pudieron elegir a sus directivas a través de elecciones competitivas y con una alta participación de sus afiliados, de manera que las directivas electas tuvieron legitimidad para convocar a nuevas manifestaciones de protesta. La oposición obtuvo triunfos como el del Colegio de Abogados, en 1983, el de mayor prestigio e influencia política, en el que logró elegir a cinco de los ocho consejeros¹³. En las siguientes votaciones, realizadas en 1985, el triunfo fue abrumador, eligiendo a nueve de los diez consejeros que correspondía renovar. La oposición tuvo candidatos triunfadores de reconocida trayectoria profesional y política, como Jaime Castillo Velasco, dirigente histórico de la DC, que se había destacado por la defensa de los derechos humanos¹⁴, y Patricio Aylwin, quien sería elegido presidente de Chile en 1989¹⁵. Los partidarios del régimen lograron elegir solo un consejero, lo cual demuestra el desánimo que les dominaba¹⁶, en tanto la oposición obtuvo la presidencia de este importante organismo¹⁷. Posteriormente, los triunfos de la oposición se repetirían en el Colegio Médico, de Ingenieros y de Periodistas, entre otros.

En las elecciones estudiantiles, los triunfos de la oposición fueron contundentes y se consiguieron con el liderazgo de las organizaciones universitarias de los partidos, a través de listas unitarias de la oposición, incluyendo al PC, que en esos momentos promovía la caída del régimen por la vía armada. La primera federación obtenida por la oposición fue la de la Universidad Católica de Valparaíso en 1984 y luego, en abril de 1985, en la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. La victoria electoral en la FEUC tuvo un enorme simbolismo porque el gremialismo, el grupo civil más influyente de la dictadura, había controlado la FEUC entre 1968 y

1973 mediante triunfos electorales y, desde el golpe de Estado, a través de la designación a dedo de sus directivas por parte del rector delegado. La FEUC fue una organización muy útil para el gremialismo, pues le permitió reclutar a numerosos estudiantes que fueron sus dirigentes, que después pasarían a trabajar en el gobierno. Su fundador, Jaime Guzmán, se había propuesto crear un nuevo partido, que fuera dominante cuando los militares regresaran a sus cuarteles y se estableciera la competencia electoral.

Los efectos de la coerción y la valoración de los derechos humanos

Decíamos que, junto con las decisiones que aumentaron los espacios de libertad, el régimen aplicó una dura coerción contra los manifestantes. Buscó impedir que continuaran las protestas, pero sus efectos fueron más allá, pues tuvieron altos costos humanos que profundizaron en la población el rechazo a la continuidad de la dictadura y fortalecieron los apoyos al restablecimiento de la democracia. Un discurso confrontacional de Pinochet, de *amigo-enemigo*, buscó polarizar al país, a fin de impedir que se desarrollara una alternativa democrática; esto se vio favorecido por las acciones de violencia realizadas por el MIR y el FPMR —el brazo militar del PC—, que provocaron la muerte de militares y carabineros¹⁸. Ambas organizaciones consideraban que el fin del régimen únicamente se conseguiría a través de la vía armada, emulando lo que por entonces había ocurrido en Nicaragua contra la dictadura de Anastasio Somoza.

Sin embargo, las condiciones políticas de Chile no eran las de los países de América Central, y la mayoría de la población estaba a favor de un proceso pacífico. El rechazo a la violencia era generalizado, tanto a la empleada por los militares como a la de las organizaciones de extrema izquierda. Una encuesta del CERC de noviembre de 1987 mostró que una ínfima

minoría de los chilenos apoyaba la censura de prensa (11%), el exilio (12%), los allanamientos de viviendas (23%) y la declaración del estado de sitio (28%) que había sido aplicado en varias oportunidades desde 1983¹⁹ (véase Cuadro 2.1).

Cuadro 2.1. Grado de respaldo a las acciones del gobierno para controlar el orden público (en %)

PREGUNTA: Si en el ejercicio de su autoridad el gobierno realiza alguna de las siguientes acciones, ¿en qué medida usted las aprueba o desaprueba? Alternativas «aprueba».

Acciones	Noviembre 1987	Agosto 1988
Toque de queda	44	42
Detención de los que protestan	27	27
Estado de sitio	26	28
Allanamientos y operativos	23	23
Cortar el tránsito	16	16
Exilio	12	12
Censura a medios de comunicación	10	11
Lanzar bombas lacrimógenas, usar el guanaco, apaleos, golpear a manifestantes	10	12

Fuente: Barómetros CERC, 1987-1988.

También eran minoritarios los apoyos a las acciones violentas de protesta empleadas por sectores de la oposición apoyadas por el Movimiento Democrático Popular (MDP) y el PC. Solo 5% apoyaba los cortes de luz, 12% estaba de acuerdo con rayar murallas y 20% con la ocupación de fábricas y escuelas. Las medidas que lograban más respaldo eran las pacíficas: 40% apoyaba las huelgas, 47% estaba de acuerdo con las marchas, 50% con las concentraciones y 61% con las declaraciones públicas (véase Cuadro 2.2).

Las acciones de violencia por parte de los militares y de un sector de la oposición tuvieron enormes repercusiones en la opinión pública, perjudicando la imagen de la oposición y de los partidos. En la encuesta de noviembre de 1987, una minoría, 33%, tenía una opinión favorable del desempeño de la oposición (notas 5 a 7 en una escala de 1 a 7), y era levemente superior la que recibía el gobierno, un 40%, una significativa inferioridad en un contexto difícil para la dictadura. Los

partidos políticos no eran mucho mejor evaluados, porque apenas 28% les ponía una buena nota (Cuadro 2.3). Esta mala calificación sería uno de los rasgos de la cultura cívica de la democracia semisoberana, que ya se insinuaba a finales del régimen militar. Solo destacaban la Iglesia católica y la Vicaría de la Solidaridad, creada por aquella para defender los derechos humanos: una amplia mayoría calificaba ambas instituciones de forma positiva, con 81% y 70% respectivamente.

Cuadro 2.2. Grado de respaldo a las acciones de la oposición (en %)

PREGUNTA: ¿Usted aprueba o desaprueba las acciones realizadas por la oposición?

Acciones	Noviembre 1987	Agosto 1988
Huelgas	40	40
Hacer declaraciones públicas	47	61
Realizar concentraciones	39	50
Las marchas	38	47
Ocupación de fábricas o escuelas	14	20
Cortar el tránsito	11	15
Rayar murallas	8	12
Apagones de luz	5	5
Colocar bombas	1	2

Fuente: Barómetros CERC, 1987-1988.

La campaña del plebiscito permitió a los partidos y a la oposición regenerar su imagen. En la encuesta de junio de 1988, la aprobación del desempeño de los partidos subió a 39%, y el de la oposición a 44%. Posteriormente, el triunfo del NO y la campaña presidencial mejoró la evaluación de partidos y oposición, en la encuesta de octubre de 1989 hubo un 57% y 63% de valoración positiva, respectivamente. La confianza en las instituciones armadas era diversa, con un gran prestigio de la Fuerza Aérea, que había mantenido menor visibilidad en la represión y que había mantenido una difícil relación con el general Pinochet, que destituyó a su comandante en jefe a comienzos de 1978. En la encuesta de noviembre de 1987, la FACH superaba ampliamente a Carabineros y el Ejército, y mejoró su apoyo en la medición de agosto de 1988, subiendo

al 64%, cinco puntos más que Carabineros y ocho puntos más que el Ejército (Cuadro 2.3). Cuando el comandante en jefe de la FACH, el general Fernando Matthei, se apresuró la noche del 5 de octubre de 1988 a reconocer el triunfo del NO, estaba actuando a nombre de una institución que tenía la simpatía de la mayoría de la población, reforzando esta opinión ciudadana con su comportamiento.

Cuadro 2.3. Evaluación del desempeño de instituciones políticas (en %)

PREGUNTA: De las siguientes instituciones, ¿con qué nota calificaría a cada una de ellas? Suma notas 5, 6 y 7.

Instituciones	Nov. 87	Abr. 88	Jun. 88	Abr. 89	Ago. 89	Oct. 89
Iglesia católica	81	79	80	78	82	84
Vicaría de la Solidaridad	70	71	69	69	—	80
Oposición	33	36	44	49	59	63
Fuerza Aérea	58	55	64	64	62	61
Carabineros	55	54	59	58	53	61
Partidos políticos	28	32	39	41	—	57
Marina	55	52	61	61	57	56
Poder Judicial	45	39	51	50	—	44
Ejército	51	45	56	55	52	43
Gobierno	40	40	49	46	41	34

Fuente: Barómetros CERC, 1987-1989.

El gobierno no midió las repercusiones que traerían las acciones represivas, que escalaron en intensidad, con niveles de violencia que horrorizaron a la opinión pública e impactaron, por primera vez, a un sector de los partidarios del gobierno de Pinochet. Estos temieron que los servicios de seguridad siguieran actuando a espaldas del gobierno y cometieran excesos aún peores²⁰. Sin embargo, en vez cambiar el itinerario constitucional e iniciar el regreso a la democracia, como ocurrió en la dictadura brasileña (1964-1985)²¹, donde la pérdida de control de los servicios de seguridad por parte del gobierno llevó a los militares a iniciar el retiro a través de la *abertura*, en Chile, por el contrario, siguió adelante la regulación sucesoria, considerando al general Pinochet como el candidato al plebiscito.

La intensidad del conflicto político, con una considerable movilización política y una oposición democrática amenazada por organizaciones de izquierda radical²², generó el cierre de filas de los partidarios del régimen en torno a la persona del general Pinochet, apoyando su opinión de que el país estaba amenazado por el terrorismo, aunque los chilenos no lo percibieran efectivamente así²³. En esas condiciones, no aparecieron fracturas en la élite del régimen, entre «duros» y «blandos», fenómeno que, según Schmitter y O'Donnell (1986), estaría en el origen de las transiciones, donde los «blandos» buscarían un acuerdo con la oposición, como fue el caso de España²⁴.

La política de la *apertura* y la intensa movilización causada por la crisis económica de 1983 tuvieron importantes consecuencias en la democracia. En primer lugar, la magnitud de la represión provocada por los militares y los servicios de seguridad renovó la memoria de la coerción del régimen militar, que se dio en su fase de instauración, reactivando la división de la sociedad y las élites. Además, influyó en la agenda democrática, reforzando la decisión del presidente Patricio Aylwin de dar prioridad a la política de verdad y justicia por los atropellos a los derechos humanos: Aylwin la consideró indispensable por la magnitud de los crímenes, una realidad que debía ser enfrentada para establecer bases éticas de la democracia, aun cuando ello provocaría el rechazo del general Pinochet y de las instituciones armadas, y generaría tensiones políticas que podrían amenazar la continuidad del proceso democrático. El mandatario consideró que no se podía esquivar la necesidad de buscar verdad y justicia por las violaciones a los derechos humanos, como ocurrió en otros países, como Uruguay. Esta propuesta fue extraordinariamente importante, considerando las enormes dificultades institucionales y políticas para llevarla a cabo, pues el general Pinochet se esforzó para impedirlo. Por este motivo, Aylwin habló de buscar justicia «en la medida de lo posible»²⁵, actitud criticada en sectores de izquierda y de la comunidad de derechos humanos en ese momento, pero, como ha recordado Rouquié (2012: 168), ella «era más audaz

de lo que hoy parece, teniendo en cuenta las condiciones desfavorables del momento».

En segundo lugar, la hipermovilización de los trabajadores, pobladores y estudiantes impactó a los economistas que asumirían la dirección económica del primer gobierno democrático. Temieron que el alto nivel de conflictos se repitiera durante la democracia e impusieran severas limitaciones a la ejecución del programa económico. Este temor motivó que sostuvieran la importancia de la concertación social con los sindicatos y las organizaciones empresariales, y que esa medida se tradujera en políticas que aseguraran la paz social. También se hizo más patente el interés de que existiera un movimiento sindical disciplinado, que colaborara en la implementación del programa económico y postergara sus demandas de fortalecer sus organizaciones para más tarde, cuando hubiera mejores condiciones económicas. Esta experiencia parece haber influido en el cambio de postura de los economistas de oposición, especialmente de los que se reunían en la Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica (Cieplan), dejando de lado su planteamiento de fortalecer los derechos y la organización de los trabajadores cuando se llegara a la democracia, cambio que fue mantenido por los equipos económicos de los sucesivos gobiernos de la Concertación. También fue asumido por los dirigentes de los partidos y la mayoría de los parlamentarios concertacionistas, que compartían la visión dominante de los economistas del conglomerado de que los empresarios eran los principales actores del proceso económico y que era necesario mantener una paz social que estimulara las inversiones.

En tercer lugar, las acciones de violencia realizadas por el FPMR no terminaron con la vuelta de la democracia, siendo el terrorismo uno de los legados negativos del autoritarismo. El FPMR y otras organizaciones que surgieron cometieron numerosos actos de violencia, que pusieron al gobierno democrático en una difícil situación, pues la Policía de Investigaciones (PDI) estaba muy debilitada en sus capacidades para investigar las

acciones de los grupos terroristas, porque la dictadura la había desplazado a un papel secundario, dando prioridad a la acción de los militares y carabineros. Durante los tres primeros años posdictadura hubo centenares de actos de violencia por estas organizaciones²⁶, que incluyeron, a comienzos de abril de 1991, el asesinato por efectivos del FPMR del senador Jaime Guzmán (UDI), principal figura de la oposición en esos momentos²⁷ (Cuadro 2.4). Ninguna otra democracia de «la tercera ola» enfrentó una amenaza de organizaciones terroristas de la envergadura de la que ocurrió en Chile, con la excepción de España por las acciones de violencia de la organización separatista vasca ETA.

Cuadro 2.4. Acciones de violencia por grupos de extrema izquierda, 1990-1992

Grupos	1990	1991	1992	Total
Lautaro	128	161	118	407
FPMR-A	90	107	52	249
MIR-M	26	18	28	72
Otros	2	10	50	62
Total	246	296	248	790
Robos de bancos	46	97	36	179

Fuente: Ministerio del Interior, tomado de Cavallo, 1998: 113.

La crisis económica y el liderazgo del ministro Hernán Büchi

Como se ha señalado, la democracia semisoberana se define por decisiones estratégicas de las élites, destacando la opción por el desempeño económico como medio de consolidación del nuevo orden político. Ello se tradujo en un «cambio con estabilidad» (French-Davis, 2014), que significó dar continuidad al sistema económico establecido por el régimen militar. Este sistema tuvo importantes cambios desde la crisis de 1983 bajo el liderazgo del ministro de Hacienda Hernán Büchi²⁸, modificaciones que fueron más allá de una visión «pragmática» del neoliberalismo²⁹, pues tuvo importantes diferencias con las políticas aplicadas por los Chicago Boys desde 1975, porque ahora las medidas económicas impulsadas

tuvieron un claro objetivo político. Con esto Büchi buscó recuperar la confianza de la élite empresarial en el liderazgo del gobierno e impulsó políticas clientelísticas que favorecieran a los pequeños y medianos empresarios, como también a los sectores populares, con el objetivo de generar simpatías y mejorar las chances electorales del general Pinochet.

Büchi impulsó una activa gestión en esta perspectiva, con un aumento selectivo de los aranceles para proteger a los agricultores, entregó subsidios a diversas actividades económicas y emprendió una renegociación de las deudas muy conveniente para los pequeños y microempresarios, desde agricultores, hasta camioneros y taxistas³⁰. Para engrosar los ingresos del fisco llevó adelante la privatización de empresas públicas³¹ de una manera que permitió a sus propios ejecutivos adquirir su control. En breve tiempo, prácticamente desmanteló el Estado empresario, privatizando empresas emblemáticas en ámbitos tan importantes como la siderurgia (la CAP), la petroquímica (Soquimich), las telecomunicaciones (Entel) y la energía (Chilectra y Endesa), lo que alteró radicalmente las bases de la presencia del Estado en la economía.

El ministro de Hacienda también buscó darle legitimidad a las privatizaciones con la participación de pequeños inversionistas, dispersando la propiedad a través del llamado «capitalismo popular». Esto ayudó al control excesivo de las empresas privatizadas por quienes dirigieron el proceso de privatización. Asimismo, le dio a la privatización cierta legitimación «desde abajo», pues miles de personas participaron de esta forma de capitalización comprando acciones a un bajo precio, obteniendo luego sustanciosas ganancias, de manera que también se sumaron a la defensa de la continuidad del sistema económico.

Para enfrentar la crisis del sistema financiero, Büchi impuso regulaciones a los bancos, aunque les concedió considerables facilidades institucionales y recursos económicos para que pudieran salir de la crisis. El Banco Central compró las deudas que los bancos privados tenían con instituciones, o personas deudoras insolventes («cartera riesgosa») por medio de un pacto

de retroventa; es decir, que pudieran adquirirlas nuevamente cuando las entidades financieras tuvieran recursos económicos³². Los bancos beneficiados se obligaban a destinar todos sus excedentes al pago de esa deuda adquirida por el instituto emisor. Dos leyes entregaron a los bancos amplias ventajas económicas para pagar la deuda, estableciendo una baja tasa del 5%; además, contaban con un plazo indefinido para cancelar el total de la deuda y solo debían pagarla si tenían excedentes. Por esta razón esta deuda fue conocida como «deuda subordinada»: estaba condicionada a que el banco tuviera utilidad³³.

Büchi empleó el «capitalismo popular» para rescatar los bancos intervenidos y después para la privatización de las empresas del Estado. Los particulares podían comprar acciones en condiciones extraordinariamente favorables, pues la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) otorgaba créditos a diez años plazo, sin intereses ni reajustes, y teniendo que pagar solo un 5% al contado. Además, estas acciones tuvieron cuantiosos incentivos tributarios, pues para los particulares era posible descontar anualmente de la base imponible de sus impuestos el 20% del valor de ellas. Esto significaba que, en buenas cuentas, el capitalista popular se convertía en propietario de sus acciones sin tener que pagar (Sapag, 1997: 157).

Una reforma legal aprobada al final de la gestión de Büchi autorizó a la junta de accionistas del banco intervenido decidir no repartir dividendos, capitalizando los montos respectivos en acciones preferentes. Como la capitalización de las acciones se hacía a valor libro y estas acciones se vendían a valor de mercado, los accionistas obtenían jugosas utilidades. Esta reforma significó, en la práctica, que los bancos dejaron de pagar la deuda al Banco Central porque optaron por capitalizar sus excedentes. Esto se mantuvo incluso en democracia, y en 1995 esa deuda ascendía a 4.500 millones de dólares, perjudicando severamente al instituto emisor (6.382 millones de dólares de diciembre de 2013)³⁴.

La gestión del ministro Büchi sacó a los empresarios y a la élite política del régimen de la actitud defensiva y de derrota

que tuvieron luego del desplome económico de 1983, lo que ayudó a recuperar la confianza y tener una actitud decidida para enfrentar el nuevo escenario que se acercaba con el cambio de régimen. Paradojalmente, un ministro de Hacienda de la dictadura tuvo mayor visión política en la formulación y aplicación de su programa económico que sus sucesores en los gobiernos democráticos³⁵.

Sin embargo, Büchi impulsó una política fiscal muy conservadora, pues para equilibrar el presupuesto recortó drásticamente el gasto social, llegando incluso a rebajar las pensiones y las remuneraciones de funcionarios públicos y disminuyó la inversión pública, especialmente en los hospitales. Todo esto provocó un deterioro aún mayor de las condiciones de vida de los sectores medios y populares, lo que intensificó su malestar y disposición a protestar contra el gobierno. Estas políticas golpearon con fuerza a los más necesitados, aumentando la pobreza en el país, que abarcó al 40% de la población en 1987, es decir, unas cinco millones de personas. Estas medidas lograron sacar a la economía de la crisis y llevarla a una dinámica de crecimiento que sorprendió a los economistas de la oposición, quienes habían augurado el desplome financiero, pero no previeron la capacidad del gobierno para salir de ella y no advirtieron sus importantes dimensiones políticas.

El eficaz desempeño del ministro Büchi le convirtió en una figura admirada en la coalición gobernante, lo que explica que fuese nominado como el candidato presidencial de la derecha en las elecciones presidenciales de 1989 y, posteriormente, haya mantenido una enorme influencia, como presidente del Instituto Libertad y Desarrollo, que asesoró a las bancadas de la UDI y RN, director de importantes empresas y columnista del diario *El Mercurio*.

Esta política económica ayuda a comprender la cohesión de la élite empresarial cuando se inaugura la democracia y su actitud de desconfianza hacia las nuevas autoridades, temiendo perder las ventajas económicas e institucionales adquiridas durante el régimen de Pinochet.

El papel de los medios de comunicación

Uno de los cambios más importantes producidos por la *apertura* fue el levantamiento de la censura de prensa, lo que produjo un considerable aumento de la información política, pues ahora los medios de comunicación podían difundir las declaraciones de la oposición e informar sobre los actos convocados por esta. Los dirigentes de la oposición democrática comenzaron a ser conocidos por los chilenos. Esto contribuyó a un mayor conocimiento de los chilenos en cuanto a las noticias del momento y provocó un alto interés por la política en amplios sectores de la población, lo que fortalecería la capacidad de movilización por parte de la oposición.

Los escasos medios independientes, los semanarios *Hoy* y *Apsi, Análisis*³⁶, la radio Cooperativa, de propiedad de personalidades de la DC, que era preferida por el 12% de los chilenos en la encuesta CERC de noviembre de 1987 y subiendo al 16% en la de julio de 1988, la radio Chilena, de la Iglesia católica, que era preferida por el 6% y el 7% respectivamente, y radio Santiago, entre otros, aprovecharon rápida y eficazmente estas nuevas condiciones, desplegando una intensa e importante labor informativa³⁷. También surgieron nuevos medios de prensa escrita, vinculados a la oposición³⁸.

Este cambio en la libertad de prensa también afectó a los medios de comunicación existentes, que habían mantenido una actitud de apoyo al régimen militar, destacando los diarios de las cadenas El Mercurio y Copesa, y los canales de televisión³⁹. Ahora debieron informar con mayor pluralismo sobre el proceso político para enfrentar la nueva competencia periodística que significó la llegada de medios de oposición.

Por primera vez, los medios de comunicación informaron de las acciones de violencia por parte de los militares y los servicios de seguridad, incluyendo actos represivos que impactaron a la opinión pública. El desarrollo del periodismo investigativo sobre diversos aspectos de la coerción y otras políticas del autoritarismo, demostró la magnitud de los excesos cometidos por los

servicios de seguridad y la responsabilidad de algunos militares en ellos. Estas investigaciones periodísticas sirvieron a aquellos jueces que se atrevieron a procesar y detener a uniformados.

La radio tuvo un importante desarrollo, captando el interés de la población. En apenas siete meses, entre noviembre de 1987 y junio de 1988, se duplicó el porcentaje de chilenos que declaró seguir frecuentemente las noticias políticas por este medio, llegando a un considerable 37%, lo que además daba cuenta del interés en los acontecimientos políticos. Por otro lado, un 50% se informaba por la televisión (Cuadro 2.5). El impacto de la radio era mayor en la población que estaba contra el régimen, porque era el medio con mayor credibilidad, especialmente para los activistas de los partidos, de las organizaciones sociales y los que trabajaban en las ONG. Los medios de comunicación independientes pudieron funcionar porque recibieron apoyo económico del exterior, lo que les permitió superar el control económico que impuso el gobierno, así como el hecho que los empresarios no hicieran publicidad en ellos.

Cuadro 2.5. Frecuencia de seguimiento de las noticias políticas en radio y TV, 1987-1988 (en %)

PREGUNTA: Con qué frecuencia sigue usted las noticias políticas en:

	Radio			Televisión		
	Nov. 1987	Marzo 1988	Junio 1988	Nov. 1987	Marzo 1988	Junio 1988
Frecuentemente	19	36	37	20	50	50
A veces	35	32	37	42	28	31
Nunca	44	31	25	36	22	19
NS/NR	—	1	—	1	1	—
N	2.052	2.400	1.500	2.052	2.400	1.500

Fuentes: Para noviembre de 1987, Encuesta nacional, 2.500 casos, CERC. Para marzo de 1988, Encuesta nacional, 2.000 casos, realizada entre el 25 de marzo y el 10 de abril de 1988, CERC. Para junio de 1988, Encuesta Santiago, 700 casos, realizada entre el 28 de junio y el 13 de julio de 1988, CERC.

Entre las estaciones de televisión, Canal 13, perteneciente a la Universidad Católica, mostró una cierta autonomía del régimen y dio una mayor acogida a las acciones opositoras, lo que le permitió aumentar la audiencia: 52% de los chilenos lo prefería en julio de 1988, un aumento de nueve puntos

porcentuales en siete meses, superando ampliamente a la cadena oficial, Canal 7, que era preferida por el 29%, disminuyendo cuatro puntos porcentuales, dando cuenta del costo que asumió por ser un medio controlado por el gobierno.

Cuadro 2.6. El canal de TV preferido, 1987-1988 (pregunta abierta) (en %)

PREGUNTA: ¿Cuál es el canal de TV que prefiere (ve más)?

	Noviembre 1987	Julio 1988
Canal 13	43	52
Canal 7	33	29
Canal 5 Concepción	4	6
Canal 11	2	3
Canal 8 Concepción	1	—
Canal 5	1	1
Telenorte	—	1
Cualquiera, todos	11	5
No ve TV	4	2
No responde	1	1
N	2.025	1.958

Fuentes: Para noviembre de 1987, Encuesta nacional, 2.500 casos, CERC. Para julio de 1988, Encuesta nacional, 1.960 casos, realizada entre el 21 y el 29 de julio de 1988, CERC.

El general Pinochet y sus asesores subestimaron las consecuencias de los cambios producidos en los medios de comunicación. Estaban convencidos de que bastaba el control de la televisión para mantener informada a la población de acuerdo a sus criterios. No consideraron el poder de la radio, que tenía una amplia audiencia y era escuchada en cualquier lugar y durante todo el día.

El mayor pluralismo en la prensa escrita alcanzado en esos años no se mantuvo después de la inauguración de la democracia. Los diarios y semanarios surgidos con financiamiento externo no sobrevivieron porque no siguieron recibiendo esa ayuda. La politización de los empresarios, incluso entre los altos ejecutivos de las empresas extranjeras, les llevaría a mantener la decisión política de no hacer publicidad en los diarios y semanarios independientes (Arriagada, 2007; Dermota, 2002; Mönckeberg, 2009).

Los gobiernos democráticos también tuvieron responsabilidad, especialmente el de Patricio Aylwin, porque se desentendieron de los costos que tendrían para el pluralismo en la prensa los obstáculos económicos impuestos a los medios independientes por el sector privado. En efecto, los ministerios y empresas públicas continuaron poniendo avisos en los diarios establecidos. De los dos diarios que se fundaron por la *apertura*, *Fortín Mapocho* debió cerrar en 1992 y *La Época* adoptó la misma decisión en 1998⁴⁰. Más tarde, en 2005 se creó el *Diario Siete* a partir de la revista *Siete+7* por iniciativa de políticos y empresarios ligados a la Concertación y en una alianza con el grupo Copesa, del empresario Álvaro Saieh, un economista que prosperó durante las privatizaciones en el régimen militar. Pero debió cerrar poco tiempo después por las mismas razones. Este desarrollo confirmó la tendencia hacia la concentración de la propiedad en la prensa escrita en dos consorcios periodísticos de orientación conservadora, Copesa y El Mercurio, con los diarios más influyentes del país, *La Tercera* y *El Mercurio*, que habían apoyado al régimen militar y han sido críticos de los gobiernos de la Concertación (Arriagada, 2007; Mönckeberg, 2009)⁴¹.

Parlamentarios y ministros de la Concertación privilegiaron las relaciones con estas dos cadenas periodísticas, que hábilmente dieron espacios a ciertos políticos, aquellos que compartían el consenso económico y valoraban las reformas neoliberales de la dictadura. Sus periodistas tuvieron acceso directo a las altas autoridades y mayor información de la Secretaría General de Gobierno que otros medios, lo que les permitió aparecer como medios colaboradores de las nuevas autoridades y así limpiar su imagen por haber apoyado al régimen militar. Cristián Zegers, largos años periodista del vespertino *La Segunda*, del grupo El Mercurio, de propiedad de Agustín Edwards, y director de este medio entre 1985 y 2011, un diario que apoyó al régimen de Pinochet, llevó al extremo esta actitud, cuando en 1999 protestó por un editorial de la revista *Mensaje*, de los jesuitas, que mantuvo independencia del régimen militar. El editorial criticaba severamente el papel de la prensa durante los años de la

dictadura. Zegers, director en esos momentos de *La Segunda* y presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), levantó su voz para reivindicar la labor de la prensa en esos años, incluyendo los medios en los cuales él trabajó, señalando que «son muchos los periodistas que contribuyeron decisivamente con su esfuerzo informativo y bajo condiciones extremas de restricción, al restablecimiento de la democracia y el Estado de derecho, a la clarificación de los problemas de derechos humanos y, sobre todo, a la transición pacífica a la democracia»⁴².

En cuanto a la televisión, Enrique Correa, ministro secretario general de Gobierno con el presidente Aylwin, tuvo mucho que ver con su desarrollo. La Ley 19.132, del 8 de abril de 1992, creó la empresa Televisión Nacional de Chile (TVN), preparada por el ministerio. Correa impulsó su tramitación por el Congreso, se preocupó de establecer la autonomía de TVN respecto del gobierno, para diferenciarse de la época del régimen de Pinochet, pero no tomó en cuenta sus funciones propias como televisión pública, que requiere un financiamiento estatal, que no se le aseguró. Esto condujo a TVN a depender del avisaje de las empresas y tener que competir en iguales condiciones que los demás canales privados de televisión, sin atender a tareas culturales y de educación cívica, como lo hacen televisiones públicas en las democracias avanzadas⁴³.

Una situación algo diferente experimentaron las radios, pues las principales lograron sobrevivir en democracia, como Cooperativa, pero otras enfrentaron severas estrecheces económicas, como radio Chilena, que debió ser vendida y dejó de emitir su programación en 2005.

En síntesis, el pluralismo de la prensa escrita y radial, algunos años después de la inauguración de la democracia, es menor al que hubo en los años de la *apertura*, lo cual ha limitado su calidad y el pluralismo en el debate público⁴⁴.

Sin los profundos cambios institucionales ocurridos desde la crisis económica de 1983 que se han analizado y que permitieron el desarrollo de la oposición democrática y la politización de una parte de la población, no le habría sido posible a

esta alcanzar la movilización electoral que le permitió derrotar al general Pinochet. No fue la habilidad de la franja televisiva, que se dio en las últimas tres semanas de la campaña del plebiscito de 1988, la que definió el fin del régimen militar, sino los cambios estructurales y el liderazgo de los partidos y de las organizaciones sociales.

El cambio en la composición de la élite opositora: el papel de los expertos

La lógica de los expertos y su influencia en los gobiernos de la Concertación comenzó antes de la inauguración de la democracia y se hizo visible durante la *apertura*. Las difíciles condiciones políticas impuestas por los nuevos gobernantes desde el primer día produjeron una profunda y amplia ruptura en la élite política de los partidos de centro e izquierda, provocando un vacío que fue ocupado por académicos y expertos pertenecientes o vinculados a los centros privados de investigación, que trabajaban en diversos campos de las ciencias sociales⁴⁵. En estos centros se desarrolló una importante labor de investigación sobre la realidad nacional y se impulsaron programas de apoyo a la comunidad⁴⁶. Algunas de estas entidades existían desde antes de 1973⁴⁷, pero la mayoría fueron creadas durante el régimen militar por estudiosos que fueron expulsados de las universidades y no partieron al exilio. Una importante iniciativa que impulsó la creación de centros de investigación fue la fundación de la Academia de Humanismo Cristiano por el cardenal arzobispo de Santiago, Raúl Silva Henríquez, en 1977. Esto permitió recibir donaciones del exterior y gestionar estos centros de estudio, gracias a la autonomía jurídica que tenía la Iglesia católica. Además, la proliferación de centros de investigación fue posible porque se contó con el apoyo de entidades gubernamentales y no gubernamentales europeas, así como de fundaciones estadounidenses que apoyaron a estos emprendimientos intelectuales

chilenos, en un marco de ayuda internacional a la democratización. A esto debe agregarse que la ayuda también llegó a partir de la reacción de académicos extranjeros ante la violencia empleada por el régimen de Pinochet⁴⁸.

Entre los centros de investigación destacó la Corporación de Estudios para Latinoamérica (Cieplan), formada por los economistas que pertenecían al Centro de Estudios de Planificación (Ceplan) de la Universidad Católica, fundado en 1970 bajo la dirección de Alejandro Foxley, acompañado por Ricardo Ffrench-Davis y Óscar Muñoz, que abandonaron la universidad por las limitaciones a la libertad de actividad académica impuesta por sus autoridades. Cieplan se convertiría en el principal centro de estudios económicos independiente en el país, reuniendo a profesionales mayoritariamente vinculados a la DC.

Los políticos recurrieron a los centros de investigación para ganar influencias en la oposición, ya sea trabajando en alguno existente o bien creando entidades nuevas. Una de las instituciones que nacieron bajo este influjo fue el Centro de Estudios del Desarrollo (CED), creado en 1982 por iniciativa del ex-canciller DC Gabriel Valdés cuando regresó a Chile, después de dirigir el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para América Latina durante una década.

El mayor espacio de libertad producido por la *apertura* hizo posible que se crearan nuevos centros, lo que facilitó la integración de políticos y académicos que regresaban del exilio. También se instalaron en Santiago organizaciones que se habían creado en el exterior, como el Instituto por el Nuevo Chile, creado a fines de los años setenta, con sede en la ciudad de Rotterdam, Holanda⁴⁹. La mayor libertad de prensa permitió a los centros de investigaciones divulgar sus actividades y los resultados de sus trabajos, lo que les dio una amplia visibilidad, especialmente ante las élites informadas y los activistas y dirigentes de los partidos⁵⁰.

La existencia de numerosas entidades privadas de investigación diversificó la composición de la élite opositora, pues junto a los abogados, que predominaron a comienzos del régimen

militar, hubo economistas, sociólogos y científicos políticos que entregaban antecedentes para alcanzar una visión más amplia y compleja del proceso político y económico.

Sin embargo, la proliferación de centros de investigación también tuvo consecuencias que complicaron el desarrollo de la oposición. Se dispersaron los esfuerzos, con múltiples proyectos de investigación y liderazgos individuales. No hubo iniciativas que hicieran posible la cooperación entre quienes trabajaban en temas comunes⁵¹, lo que fragmentó a la élite intelectual y política⁵²; tampoco se estimuló el debate y el desarrollo de ideas en un clima de confrontación y acuerdos. La hostilidad al disenso predominó en los intelectuales que entraron al gobierno en 1990, aun cuando es indispensable para el desarrollo de las instituciones democráticas (Sunstein, 2003). Esta hostilidad se puso de manifiesto, con enormes repercusiones en el desarrollo de la Concertación, en el rechazo al Informe de Desarrollo Humano 1998 del PNUD por el gobierno del presidente Frei Ruiz-Tagle, que cuestionó su tesis de que había «paradojas de la modernización», porque el crecimiento económico provocaba malestar en la sociedad⁵³. Volveremos sobre este episodio en el capítulo 11.

La relación de los académicos de los centros de estudio con los partidos fue débil, pues no participaron en su vida interna y, por ello, tampoco ayudaron a la modernización de las colectividades. Los dirigentes partidistas mostraron escaso interés por acoger a los académicos para ampliar su élite dirigente, temiendo ver amenazadas sus bases de poder; por esto desaprovecharon sus ideas para actualizar sus programas y planteamientos estratégicos. La desconfianza entre los dirigentes de los partidos y los intelectuales que se observó en democracia, estaba presente en la oposición al régimen de Pinochet cuando se advertía que este se aproximaba a su fin.

Después de la inauguración de la democracia, los centros privados decayeron y la gran mayoría debió cerrar⁵⁴. Sus principales investigadores entraron al gobierno y siguieron una carrera política o entrarían más tarde a trabajar en el sector

privado, en consultoras o creando empresas. El financiamiento externo se cortó para los centros privados, que se había dado por las especiales condiciones impuestas por el régimen militar; las nuevas autoridades no otorgaron fondos que llenaran ese vacío. Por otro lado, las universidades fueron reticentes a incorporar a los académicos expulsados por la dictadura, mayoritariamente de izquierda, dando cuenta de cuán presente estaban las diferencias ideológicas y los celos profesionales.

Los pocos centros privados que subsistieron lo consiguieron gracias a sus vinculaciones con parlamentarios, con autoridades de gobierno o con el sector privado. Estas relaciones franquearon el acceso a recursos públicos y de algunos organismos internacionales, lo que permitió la subsistencia de estas organizaciones y su influencia en la preparación de políticas públicas⁵⁵.

La irrupción de los expertos en la acción política: el plebiscito de 1988

La incorporación de los expertos a la acción política de la oposición tuvo un fuerte impulso en 1987 con la creación del Comité Técnico, integrado por sociólogos y científicos políticos que trabajaban en los principales centros privados de investigación⁵⁶. Este comité se reunió semanalmente para asesorar a la oposición en una mejor comprensión de la coyuntura y de las posibilidades de evolución, ofreciendo alternativas de acción a partir de diversas fuentes de información, en especial las encuestas⁵⁷. Genaro Arriagada, secretario ejecutivo del Comando del NO⁵⁸, designó a Enrique Correa, entonces militante del MAPU, como coordinador del Comité Técnico. Correa no tenía las credenciales académicas de los expertos, había estudiado filosofía y no había desarrollado una actividad académica, pues su biografía era la de un político. Sin embargo, Correa aprovechó con gran habilidad el trabajo de los expertos, a partir de la información que recibía en las reuniones

del Comité Técnico, preparando después una minuta con las conclusiones y las recomendaciones acerca de las posibles decisiones que debía tomar la oposición, que él respaldaba con el argumento que habían dado los expertos. Correa se erigió como el líder de un equipo de conocidos académicos que entregaba herramientas para comprender mejor el proceso político y que era de utilidad para los dirigentes de la oposición. Aquí comienza Correa su meteórica carrera política, que le convertiría en una de las personalidades más influyentes de la Concertación, sin haber tenido un alto cargo en su partido o en un centro de investigación independiente, como fue la biografía de otros colegas de gabinete del gobierno de Aylwin, como Edgardo Boeninger y Alejandro Foxley⁵⁹.

Una segunda iniciativa que ayudó a la irrupción de los expertos en la acción política, que tendría una enorme influencia en la campaña electoral, fue la creación del CIS, una iniciativa de académicos del CED, ILET y SUR para influir en la campaña televisiva del plebiscito sucesorio. Como no tenían experiencia en campañas electorales contrataron a una consultora estadounidense que les ayudó en el diseño de la campaña electoral y en las técnicas de recolección de datos, introduciéndolos en los estudios focales o *focus groups*, una técnica de investigación social poco conocida entonces en el país. El CIS realizó encuestas y *focus groups* para apoyar su trabajo, sin considerar los resultados de las encuestas realizadas por los otros centros privados. Los académicos del CIS se fascinaron con los *focus groups*, desconociendo su carácter como técnica de información social, sosteniendo que eran efectivamente representativos del conjunto de la población, aseveración con la cual buscaban persuadir a las élites sobre ciertas conclusiones. Esta interpretación era errada, porque esa capacidad de representación solo la tienen las encuestas.

Destacamos este hecho porque el CIS definió en buena medida el contenido y el estilo de la campaña del NO a partir de un estudio focal realizado por una antropóloga estadounidense contratada para ayudarles a definir los criterios que orientarían

la campaña de la oposición. No conocía la realidad nacional, ni la estudió, sino que se limitó a aplicar una técnica de la cual extrajo conclusiones, como si el estudio focal fuera representativo de las opiniones y actitudes de los chilenos. Su principal conclusión fue la presencia dominante del miedo en las personas, lo cual fue mirado con extrema preocupación por los analistas del CIS, que temieron que los chilenos no concurrirían a votar por el NO en el plebiscito, lo que allanaría el camino al triunfo del general Pinochet.

Esta conclusión de la especialista estadounidense llevó a los analistas a concluir algo que sería luego asumido por la oposición: el principal objetivo de la campaña debería ser combatir el miedo y la manera de lograrlo sería a través de un mensaje con un mínimo contenido político, hasta despolitizado, sin aludir a la dictadura, apelando a las emociones. Este planteamiento se resumió en el eslogan de la Franja del NO: «La alegría ya viene»⁶⁰. Era un argumento que se desarrolló a partir de la psicología social, basado en una técnica que, como dijimos, no entrega una información representativa de la población y, por ende, alejada de la realidad subjetiva de los chilenos y sin considerar el contexto político.

El miedo no era un rasgo dominante en la opinión pública, que impediría a los chilenos participar en el plebiscito. No lo había sido durante la *apertura*, en la cual hubo una masiva participación ciudadana en actos convocados por la oposición, sin que la represión amedrentara a los individuos. Esa era una realidad que valía más que cualquier estudio social, especialmente si era un estudio focal. Las encuestas, por su parte, mostraban una actitud muy decidida y ampliamente mayoritaria de la población a participar en el plebiscito. La realizada por el CERC en noviembre de 1987, con una extensa muestra nacional, de 2.400 entrevistas, mostró que el 89% de los encuestados declaraba estar decidido a votar en el plebiscito que se realizaría en 1988, porcentaje sorprendentemente alto, porque el referéndum todavía no se convocaba. Además, los chilenos estaban muy interesados e informados del acontecer político, un 56%

pudo nombrar uno o más partidos políticos y había una gran atracción por participar en estos, un 12% estaba dispuesto a integrarse a un partido⁶¹.

La ausencia del miedo fue más notoria en el año del plebiscito, pues los chilenos estaban mayoritariamente dispuestos a concurrir a votar, incluso en la eventualidad de que hubiese dificultades⁶². En efecto, en las tres encuestas realizadas por el CERC antes de la votación, se mostró una altísima disposición a sufragar –incluso habiendo inconvenientes antes o durante el día de la votación, y disturbios–, disposición que fue aumentando a medida que se acercaba el 5 de octubre, fecha del plebiscito; la cantidad de personas dispuestas a votar aumentó desde un 72%, que se dio en la medición de julio, a un 79% en la de agosto, cuando Augusto Pinochet ya había sido nominado como candidato, y se empinó al 85% en septiembre (Cuadro 2.7). Estos resultados evidencian que el miedo no era un obstáculo para la movilización electoral.

Los expertos del CIS presentaron de manera muy convincente ante dirigentes de la oposición los resultados entregados por los *focus groups*, mostrándolos como representativos del clima de opinión existente en la población. Alejandro Foxley recordaba esta presentación en la entrevista que dio a Jeffrey Puryear, un alto funcionario de la Fundación Ford⁶³, años después, cuando era ministro de Aylwin, impactado por la calidad de la información, que consideró más útil que la proporcionada por las encuestas: «Esto era totalmente nuevo, fue decisivo, fue fascinante. Entender lo que realmente la gente siente, fue lo que un *focus group* daba, a diferencia de una encuesta. Entrega una textura mucho más rica. De aquí vino el tema de la debilidad, por ejemplo, materia central que luego permearía toda la campaña electoral» (Puryear, 1994: 147).

Suele ocurrir en las campañas electorales que aparezcan contradicciones entre los resultados de encuestas y los que entregan los *focus groups*, como recordó Anthony King (2002), mencionando la experiencia del Partido Conservador de Gran Bretaña⁶⁴. Recordó que los expertos electorales optaron por

emplear los resultados de las encuestas y no de los *focus groups*, que entregaban una información contradictoria a aquellas, precisamente porque las encuestas representan las opiniones y actitudes de los votantes, función que no tienen los grupos focales. La propuesta de una campaña despolitizada demostraba no solo el poder de los expertos para influir en la acción política, sino también una visión del futuro en la que, según ellos, a partir de una campaña de escaso antagonismo con el régimen militar, se facilitaría la cooperación con los «blandos» para avanzar a la democracia. Esta visión se apoyaba en la conversión ideológica de importantes cientistas sociales, quienes, de adherir a un socialismo radical en los años setenta, evolucionaron hacia una postura de interés y hasta de simpatía con la revolución neoliberal. La adhesión se basó en la consideración del argumento de los ideólogos neoliberales en Chile, que este aumentaba la libertad individual⁶⁵.

Cuadro 2.7. La decisión de votar en el plebiscito de 1988* (en %)

	Julio	Agosto	Septiembre
1. Debe hacer una larga cola para votar	94,0	94,1	95,9
2. Tener mucho que hacer en su casa	95,1	94,5	96,5
3. Tener que hacer una diligencia personal	89,1	89,3	92,4
4. Tener dificultades de locomoción	90,2	89,4	92,8
5. Ir a votar a pesar de que haya disturbios	71,7	78,8	85,4

* La pregunta fue: «Me gustaría saber si el día del plebiscito usted está dispuesto a votar a pesar de que se presente alguna o algunas de las siguientes situaciones».

Fuente: La encuesta de julio fue realizada por CERC-Diagnos, en una muestra nacional de 2.400 entrevistas, representativa del 80% de la población. La de agosto y septiembre fue efectuada por el CERC, sobre una muestra nacional de 2.400 entrevistas cada una, representativa del 98% de la población.

La calidad de la Franja del NO, especialmente en comparación a la del SÍ, certificó el trabajo de los expertos y publicistas del CIS frente a los dirigentes de los partidos, que atribuyeron el triunfo de la Concertación al impacto de la franja⁶⁶. Se le entregó al CIS la labor de crear la publicidad de la campaña electoral para la elección presidencial del 14 de diciembre de 1989, en la cual Patricio Aylwin se impuso ampliamente en la primera vuelta. Ambos resultados en las urnas tuvieron importantes repercusiones en las campañas electorales, en los

partidos y en el espacio de la política, pues las campañas se definieron principalmente en torno a la televisión, que fue considerada un recurso determinante en las opciones de los electores, por encima de la labor de los partidos, que debían ser dejados en un segundo plano. Se produjo un efecto *path dependence* respecto de la importancia de este tipo de trabajo de campaña electoral, siguiendo los criterios empleados en la Franja del NO: prioridad de la campaña televisiva, alejamiento de los partidos y sus activistas en las labores de propaganda, ausencia de mensajes con contenidos políticos y alta personalización en los candidatos.

Los partidos escondieron su nombre y dejaron de mostrar sus emblemas, favoreciendo una campaña altamente personalizada en el candidato. La excepción fue la UDI, que no se vería perjudicada por su discurso político y el empleo del nombre y símbolo del partido, llegando a ser la principal colectividad de la derecha y después del país, y uno de sus dirigentes, Joaquín Lavín, en las elecciones presidenciales de 1999 estuvo a escasos 31.140 votos del candidato de la Concertación, Ricardo Lagos (PS/PPD), que se impuso finalmente. Miembros del CIS fueron contratados por candidatos de otros países para que les asesoraran, iniciando una nueva actividad profesional, que se intensificó después de que dejaron el gobierno para trabajar en el sector privado. Para esto el discurso despolitizado desarrollado desde la campaña del NO fue muy persuasivo para encontrar clientes en empresarios politizados e identificados con el régimen de Pinochet.

El alejamiento de los partidos de la dirección y desarrollo de las campañas electorales fue reforzado por la privatización de estas, con la contratación de publicistas y asesores de campaña que desarrollaron su labor siguiendo criterios de expertos, sin tomar en cuenta consideraciones políticas. No se buscó la modernización de los partidos, sino la subcontratación de sus labores de campaña electoral con activistas pagados, lo que llevaría a un debilitamiento de estos partidos como organización, al no movilizar a los activistas y militantes, pues la

distribución de la propaganda se haría preferentemente con personal contratado. Se vio al elector desde la óptica del marketing, como un individuo sin lealtades partidistas y políticas, que puede ser convencido por la propaganda, especialmente la televisiva⁶⁷. Asimismo, se promovió la personalización de las campañas electorales, fenómeno que se vio favorecido por un sistema electoral que daba contundentes recursos políticos a los parlamentarios que iban a la reelección. Esto perjudicó a los partidos, que perdieron protagonismo en una actividad de capital importancia para integrar a sus dirigentes y militantes.

El resurgimiento de los partidos y el liderazgo de la DC

La tradición democrática del país favoreció el trabajo de la oposición, pues dispuso de partidos que tenían un cierto grado de organización territorial, dirigentes con experiencia política y profesionales y expertos que habían hecho posible que la oposición se constituyera como una alternativa de poder, derrotara a Pinochet y pudiera aspirar a dar una adecuada conducción al futuro gobierno democrático⁶⁸.

La izquierda estaba decaída y fragmentada por la experiencia fallida de la Unidad Popular (UP). El principal partido del conglomerado, el Comunista, optó en 1980 por una vía armada para salir del régimen militar, formando el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), lo que lo alejó de la oposición democrática y de sus instancias unitarias (Alianza Democrática y Concertación).

El Partido Socialista estaba dividido por cuestiones programáticas y por estrategias para oponerse al régimen de Pinochet. Por un lado, estaba la facción de Ricardo Núñez, con una baja presencia en el país e importante en el exterior, que tuvo una incorporación de numerosos académicos e intelectuales que habían pertenecido al MAPU y que desarrollaron una fuerte autocrítica del gobierno de la Unidad Popular («los socialistas

renovados»). El PS-Núñez seguiría una alianza estratégica con la DC con la cual fundó la Alianza Democrática en 1983.

Por otro lado, estaba el PS-Almeyda cuya principal figura era el excanciller Clodomiro Almeyda, que tenía una mayor presencia en el país y era débil en el exilio, y siguió una estrategia diferente, con una alianza estratégica con el PC, formando con este en 1983 el Movimiento Democrático Popular (MDP), junto al MIR⁶⁹.

La debilidad de la izquierda y la ausencia de un partido de derecha en la oposición dejó un amplio espacio que fue ocupado por la DC, que además se benefició del apoyo de la Iglesia católica, que tuvo un papel activo en la defensa de los derechos humanos.

En este contexto de debilidad y división en la izquierda, la Democracia Cristiana aparecía como la colectividad llamada a ejercer el liderazgo en la oposición, por haber sido el principal partido de Chile desde 1961 y haber superado las adversas condiciones políticas impuestas por el régimen de Pinochet⁷⁰. La DC mantuvo su organización porque el partido solo fue «suspendido», mientras que los partidos de izquierda fueron prohibidos y reprimidos con dureza. Aunque también personalidades de la DC fueron víctimas de la represión, como el exilio del senador Renán Fuentealba en 1975 y el asesinato fallido de uno de los fundadores de la DC, Bernardo Leighton, por parte de la DINA, en Roma en 1975⁷¹.

La DC tenía otro tipo de problemas, relacionados con su historia y con las diferencias entre sus dirigentes durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970) y en la oposición al gobierno de la Unidad Popular (1970-1973), que se agravaron por el golpe de Estado, por las distintas reacciones que adoptaron⁷².

La Democracia Cristiana contaba con el liderazgo del ex-presidente Eduardo Frei Montalva, una figura de integración entre sus dirigentes y con gran prestigio en la población, especialmente en los sectores populares y en el mundo rural por haber impulsado una reforma agraria y la sindicalización



de los campesinos. Su prematuro fallecimiento a comienzos de 1982 provocó un vacío que no sería llenado, pues reaparecieron las divisiones y desconfianzas históricas. La respuesta de sus dirigentes en ese momento tan difícil fue designar una directiva de consenso, con Gabriel Valdés como presidente, y Patricio Aylwin como primer vicepresidente. Esto generaría una cohesión transitoria, que se rompería después del plebiscito de 1988⁷³.

La vinculación de sus principales dirigentes con la Iglesia católica, que gozaba de amplio prestigio en la sociedad por la defensa de los derechos humanos, le permitió atraer a estudiantes, profesionales y dirigentes sindicales y de organizaciones sociales. La Democracia Cristiana fue favorecida por la debilidad de la izquierda, pudiendo ocupar un amplio espacio político sin tener que competir con ella. Tampoco enfrentó a un partido de derecha en la oposición, pues las dos colectividades fundadas en 1983, la UDI y la Unión Nacional (posteriormente RN), apoyaban al régimen de Pinochet.

Estos factores le permitieron crecer fuertemente en la *apertura* y la DC llegó a ser el partido dominante en las elecciones de las federaciones estudiantiles, de los colegios profesionales, en las organizaciones sindicales y en la dirección de las instancias unitarias de la oposición⁷⁴, como la Asamblea de la Civilidad⁷⁵ y el Comité de Elecciones Libres (CEL)⁷⁶. No fue casual que el líder de la DC, Patricio Aylwin, fuera designado como el portavoz del NO durante la campaña previa al plebiscito de 1988, lo que le convertiría en la principal figura de la oposición.

Después del plebiscito de 1988, la DC era claramente el partido que debía cumplir un papel de liderazgo en la oposición para conducir la transición a la democracia. Los datos de dos encuestas mostraban a la DC como el principal partido del país. En la realizada en noviembre de 1987, un 25% le mostraba una alta simpatía (respuestas a las notas de 7 a 10, en una escala de diez peldaños), mientras los otros partidos de oposición recibían porcentajes considerablemente menores:

9% tenía el PS, 7% el PR y 4% el PC. En una pregunta abierta sobre el partido más cerca de las ideas del encuestado, la DC conseguía un 21% —superando ampliamente a las demás colectividades—, 3% el PS y 2% RN, aunque más de la mitad de los encuestados no menciona un partido (56%). En la encuesta de diciembre de 1989, antes de las elecciones presidenciales, cuando Patricio Aylwin era el abanderado de la Concertación, la DC aparecía como el partido con el mayor número de intención de voto, 38%, superando ampliamente a las demás colectividades, 10% el PS/PPD, 10% RN y 4% la UDI.

Sin embargo, estos datos también mostraban que había una subrepresentación de los partidos de izquierda y de derecha, y era previsible que, una vez que los de izquierda se reorganizaran, y la derecha consolidara su organización partidaria, la DC enfrentaría una competencia bilateral, que le haría más difícil mantener la posición de liderazgo. Los dirigentes de la DC no previeron este desarrollo y no fortalecieron la organización ni ampliaron su élite dirigente, integrando a las personalidades que se habían dado a conocer por su labor de defensa de los derechos humanos, en las organizaciones sociales y en los centros privados de investigación, muchos de los cuales eran militantes falangistas pasivos o independientes que estaban dispuestos a integrarse a la DC para participar en el cambio de régimen. Pero los dirigentes históricos del partido no estaban dispuestos a compartir posiciones de poder con otras personalidades y preferían mantener una organización tradicional, en que predominaban las relaciones personales y redes clientelísticas.

La Democracia Cristiana enfrentó mal el nuevo escenario político abierto por el triunfo del NO. Se puso de relieve su debilidad organizativa, el desmedido poder de caudillos, que tenían una amplia presencia en sus órganos decisorios, y la ausencia de una figura con un liderazgo indiscutido, como había sido Eduardo Frei Montalva. Reaparecieron las diferencias históricas entre sus principales dirigentes ante el gobierno de la Unidad Popular y el golpe de Estado de 1973, temas que la izquierda había resuelto con anterioridad, mostrando

a un mundo democratacristiano dividido por conflictos del pasado, división que había permanecido en un estado latente.

Mientras en el PS rápidamente surgieron voces apoyando la candidatura presidencial de Patricio Aylwin, reconociendo su hábil desempeño como portavoz del NO⁷⁷, en su colectividad este hecho fue pasado por alto, surgiendo otros dos candidatos: Gabriel Valdés y Eduardo Frei Ruiz-Tagle⁷⁸. Aylwin tenía mejores credenciales que estos para ser abanderado de la DC, por su biografía política —senador, presidente de la Cámara Alta y, varias veces, presidente de la DC, cargo que ocupaba ahora desde fines de 1987—, y una prestigiosa carrera académica y profesional. Tenía la ventaja de ser presidente de la DC, lo que le permitió reconstituir una amplia base de apoyo a nivel territorial del partido.

Valdés tenía una menor trayectoria como dirigente de la DC frente a Aylwin. Habiendo sido vicepresidente de la Falange Nacional a comienzos de los años cincuenta y, aunque había sido presidente del partido entre 1982 y 1987, no logró construir una red de apoyo en los dirigentes intermedios de la colectividad, que eran clave en las decisiones de la junta nacional que elegiría al candidato presidencial. Valdés había sido un destacado ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva y después fue director general del PNUD para América Latina (1971-1981). Fue elegido por consenso presidente de la DC después de la muerte del expresidente Frei y por mayoría de la junta nacional en 1985, sin postular a la reelección en 1987.

Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el hijo mayor del expresidente Frei Montalva, ingeniero hidráulico y empresario, no había tenido actividad política hasta la muerte de su padre, el 22 de enero de 1982. Después, su vida política fue limitada y sin destacarse, pues presidió la fundación creada por los antiguos colaboradores del expresidente Frei Montalva para difundir su obra política e integró el Comité de Elecciones Libres (CEL). En los actos en regiones organizados por el CEL, Frei Ruiz-Tagle fue recibido con amplia simpatía, sobre todo en los

sectores populares, donde se creyó que era el expresidente. Así se ve que la memoria de su padre estaba muy presente en los chilenos. En una encuesta de junio de 1988, en que se preguntaba la opinión sobre los presidentes desde 1958 con el sistema de notas de 1 a 7, Eduardo Frei Montalva obtenía una nota promedio de 5,6, similar a la de Jorge Alessandri y considerablemente superior a la de Salvador Allende, 4,1, y Augusto Pinochet, 3,1. Esta pregunta fue replicada en noviembre de 1989, mejorando la nota promedio al 5,7, mientras Alessandri bajaba al 5,4 y subían levemente Allende y Pinochet, 4,4 y 3,6, respectivamente. También mejoró su imagen en la medición de diciembre de 1990 y marzo de 1991, cuando Frei Montalva alcanzó un 5,9 como nota promedio, la más alta de la serie de tiempo que se extiende hasta el 2006.

Eduardo Frei Ruiz-Tagle fue apoyado en su postulación por exministros de su padre, por académicos de los centros de estudios —especialmente los de Cieplan, convencidos de que su elección llevaría a la renovación de la élite demócratacristiana— y por dirigentes que vieron el capital político del apellido Frei, que aseguraba un triunfo electoral. Esto era confirmado por las encuestas, que mostraban a Frei hijo como el político de la oposición con mayor respaldo. En una encuesta de diciembre de 1988, en la pregunta abierta «¿quién le gustaría fuera el próximo presidente de Chile?», Frei aparecía con el mayor porcentaje de menciones, 20,4%, superando ampliamente a Aylwin, que recibía 11,3%, Ricardo Lagos, con 4,3%, y Gabriel Valdés, con solo 2,1%. Frei también obtenía el mayor porcentaje de preferencias en la pregunta cerrada de intención de voto presidencial, subiendo al 30% de las menciones, Aylwin recibía 14,1%, quedando a muchísima distancia Lagos y Valdés, con 2,7% cada uno.

Accidentada elección del candidato presidencial de la DC

La DC decidió definir el candidato presidencial a través de una junta nacional, con delegados elegidos por votación directa

de sus militantes, un procedimiento inédito en su historia, para dar una potente señal de apoyo a la democratización⁷⁹. Patricio Aylwin era presidente del partido, aunque la organización del acto electoral estuvo a cargo del secretario general de la colectividad, Gutenberg Martínez, una personalidad muy controvertida en el partido. A diferencia de otros altos dirigentes de la DC, que se habían destacado por su desempeño profesional o académico, Martínez basaba su poder en un trabajo cuidadoso y constante de construir lealtades entre dirigentes intermedios del PDC, las que aseguró desplazando a competidores de su generación que tenían prestigio profesional o académico. Su liderazgo era individual, sin reunir un grupo de colaboradores que le ayudaran a impulsar la modernización del partido, sino que le acompañaran a construir una poderosa «máquina» partidaria. Martínez no había participado activamente en la oposición contra la dictadura, a diferencia de otras personalidades de su generación, que lo hicieron en la defensa de los derechos humanos, en los colegios profesionales durante la *apertura* o bien desde el ámbito académico⁸⁰. Su liderazgo era estrictamente circunscrito al interior de la DC, llegando a ser el político de su generación con más poder.

Lo que parecía ser una elección que mostraría la fortaleza demócratacristiana al movilizar a decenas de miles de militantes, se convirtió en un lamentable episodio, tras la denuncia pública de los representantes de las candidaturas de Valdés y Frei de manipulación del padrón electoral para favorecer la postulación de Aylwin. Las desconfianzas hacia Martínez resaltaron la gravedad de la situación. No se ponía en duda que el resultado más probable fuera el triunfo de Patricio Aylwin, pero se cuestionaba la seriedad de la organización del acto electoral.

El episodio, conocido como «Carmengate» (bautizado así por la dirección de la sede central de la DC, entonces en la calle Carmen), escalaría hasta convertirse en un grave conflicto que activó antiguas diferencias entre los principales dirigentes de la DC por el golpe de Estado de 1973, con desconfianzas

que se habían mantenido latentes desde entonces. Se ordenó una investigación del Tribunal Electoral para verificar las acusaciones. Durante largas semanas, la DC se vio envuelta en una bochornosa situación, incluyendo el hecho de que Frei Ruiz-Tagle envió una durísima carta a Aylwin, acusándolo de falta de independencia, a la cual este respondió con fuerza, hechos que fueron difundidos por la prensa⁸¹. Lo acontecido paralizó a la oposición en un momento decisivo, debiendo esperar que se resolviera este conflicto para seguir adelante con la definición del abanderado común y la propuesta programática. La investigación del Tribunal Electoral no encontró irregularidades en las elecciones y en una junta nacional realizada a comienzos de 1989, Aylwin fue elegido en forma unánime candidato presidencial de la DC, que se sabía sería el de la Concertación⁸².

Este incidente fue una mala señal al resto de la oposición y al país respecto de las capacidades de la DC para liderar la Concertación. Además, deterioró gravemente las confianzas entre los dirigentes DC. Patricio Aylwin tomó distancia de los incidentes y formó su equipo de gobierno con personalidades que habían apoyado a Valdés o a Frei, y prescindió de Martínez en la formación de su gobierno, postulando este a la Cámara de Diputados⁸³.

Valdés no se conformó con la derrota y reiterará que este episodio le impidió llegar a La Moneda, responsabilizando a Aylwin de ello⁸⁴. No consideró el hecho que él mismo había perdido apoyos cuando enfrentó la elección, pues no logró conservar el respaldo de sus colaboradores cuando fue presidente de la DC (1982-1987), como los académicos de Cieplan, que apoyaron a Frei, y otros a Aylwin, como Edgardo Boeninger. Valdés sería elegido senador por una circunscripción del sur del país y presidente de la Cámara Alta (1990-1996), desarrollando una destacada labor, elogiada en la Concertación y la oposición, pero no se propuso postular nuevamente a la Presidencia para suceder a Aylwin.

Frei Ruiz-Tagle fue elegido senador por una de las dos circunscripciones de Santiago en las elecciones de 1989,

presidente del partido en 1992 y fue el candidato DC para las elecciones presidenciales de 1993, convirtiéndose después en el abanderado de la Concertación tras derrotar ampliamente al candidato de la izquierda, Ricardo Lagos.

La DC asumió las principales responsabilidades en los dos primeros gobiernos democráticos, con una presencia mayoritaria en el gabinete. Sin embargo, descuidó otras funciones para mantenerse como el principal partido de la Concertación, pues no se preocupó de desarrollar propuestas programáticas que le permitieran mostrar su perfil que le diera identidad ante los votantes. También desatendió su presencia en el movimiento estudiantil y sindical, perdiendo en las elecciones parlamentarias de 1997 y siendo su candidato presidencial ampliamente derrotado en las primarias de la Concertación en 1999⁸⁵.

La integración de la élite autoritaria en la democracia: el papel de Jaime Guzmán y su acuerdo con Gabriel Valdés

La democracia semisoberana está definida por la continuidad de instituciones y políticos de la dictadura, destacando el general Pinochet y varios de sus excolaboradores, que fueron elegidos parlamentarios en las elecciones de 1989. Uno de ellos fue Jaime Guzmán, el principal asesor civil del exdictador⁸⁶. Guzmán fue elegido senador por la circunscripción de Santiago Poniente, con el 17,2%, venciendo a su compañero de lista, Miguel Otero (RN), beneficiándose del binominal (Cuadro 2.8). No obstante, Jaime Guzmán obtuvo una votación mucho menor que la del candidato de la Concertación, Ricardo Lagos, que recibió el 30,6% de las preferencias, derrotado por Andrés Zaldívar, entonces presidente de la DC, que alcanzó un 31,3%.

Esta continuidad institucional y personal planteó un complejo desafío para las figuras del régimen de Pinochet, que debían renovar las bases de su liderazgo de acuerdo al juego democrático. Esta exigencia era más urgente en la UDI, que

apoyó a Pinochet hasta el final⁸⁷, mientras que RN dio una señal, desde la noche del 5 de octubre de 1988, de cercanía con la oposición, a través del reconocimiento que hizo en un programa de televisión su presidente, Sergio Onofre Jarpa, de la victoria del NO. Además, la UDI se opuso a la reforma constitucional, que negociaron el gobierno y la Concertación después del plebiscito. Esta actitud de la UDI le granjeó la enemistad del ministro del Interior de entonces, Carlos Cáceres, exmilitante del Partido Nacional, cuyos activistas y dirigentes se habían integrado a RN⁸⁸. Esta política de la UDI le llevó a tener un resultado frustrante en las elecciones de 1989, siendo superada ampliamente por RN. En efecto, mientras la UDI eligió tres senadores, RN logró seis; frente a los once diputados elegidos en la lista de la UDI, que recibió un 9,17% de los votos, RN consiguió veintinueve, con un 18,22% de las preferencias (Angell y Pollack, 1990: 13). RN había tenido una actitud más decidida e innovadora durante estos meses cruciales del cambio de régimen, que le habían favorecido electoralmente, mientras la UDI —y en particular Jaime Guzmán— cometió errores.

Cuadro 2.8. Resultados de las elecciones de senador en la circunscripción Santiago Poniente en 1989

Candidatos y coaliciones	Partido	Votos	%
Ricardo Lagos Escobar	PPD	399.721	30,6
Andrés Zaldívar Larraín	DC	408.227	31,3
Concertación por la Democracia	DC-PH-PR-PPD-PSD-PLV	807.948	61,9
Miguel Otero	RN	199.856	15,3
Jaime Guzmán Errázuriz	UDI	224.396	17,2
Democracia y Progreso	RN-UDI	424.252	32,5
Sergio Santander Sepúlveda	PL	59.834	4,6
Rodrigo Miranda	PL	13.435	1,0
Liberal-Socialista Chileno	PL-PSCH	73.269	5,6
Votos válidamente emitidos	—	1.305.469	95,2
Nulos	—	41.338	3,0
Blancos	—	24.613	1,8
Votos emitidos	—	1.371.420	100

Fuente: www.elecciones.gov.cl

Guzmán dio un audaz paso para recuperar el liderazgo político, con una iniciativa que consideraba sus intereses, los de su partido, y los del general Pinochet. Antes que el presidente Aylwin jurara en su cargo, Guzmán visitó al senador Gabriel Valdés y le ofreció el apoyo de su partido para ser elegido presidente del Senado⁸⁹. Le planteó que era la única persona de la Concertación que podía asegurar una ceremonia sin incidentes, que evitara una humillación a Pinochet⁹⁰. Era una importante concesión al conglomerado, que no tenía mayoría y porque el presidente integraba el Consejo de Seguridad Nacional, en el cual Aylwin estaría en minoría. Pese a que la UDI tenía solo dos senadores, Guzmán sabía que su iniciativa sería respaldada por varios parlamentarios designados, que vieron las ventajas de las que Pinochet gozaría en esa elección. A Guzmán le interesaba que Pinochet abandonara la Presidencia sin incidentes, para minimizar el daño a quienes fueron sus colaboradores.

Gabriel Valdés informó de la propuesta al presidente electo y a los senadores de la Concertación, que estuvieron de acuerdo en acoger la propuesta de Guzmán. De esta forma, Valdés fue elegido presidente del Senado y Beltrán Urenda, un independiente apoyado por la UDI en las elecciones, asumió como vicepresidente⁹¹. La ceremonia de transmisión del mando presidencial se desarrolló con relativa normalidad, y Pinochet se preocupó de cada detalle de ese momento histórico, entregando personalmente a Aylwin el símbolo de la Presidencia. El exdictador se retiró del Congreso Pleno en medio de los aplausos de los parlamentarios de la UDI y RN, con su imagen de hombre de Estado ante sus partidarios. Guzmán había hecho posible este desenlace.

Jaime Guzmán había conseguido retomar la iniciativa política y perfilarse como un hábil político. Durante el año que actuó en democracia, antes de ser asesinado a comienzos de abril de 1991, desplegó una intensa labor en el Parlamento y ante la opinión pública, llegando a ser la principal figura de la oposición. En la primera oportunidad en que se preguntó por

el dirigente político más importante de la oposición, en junio de 1990, se ubicó en tercer lugar, con 8% de las menciones, superado ampliamente por Sergio Onofre Jarpa, presidente de RN, elegido senador en 1989, que recibió 23,3% de las menciones, y Andrés Allamand, secretario general de la misma colectividad, con 11,1%.

En la segunda medición, en diciembre de 1990, las menciones que recibió Guzmán aumentaron al 12,6% y se desplomaron las que recibió Jarpa, que tuvo 13,3%, ubicándose en un segundo lugar, mientras que Allamand mejoró levemente, con 14,7%. En la encuesta de marzo de 1991, realizada pocas semanas antes de su asesinato, Guzmán se ubicó en el primer lugar, con 14,6%, superando a Allamand, que recibió 13,8%, y Jarpa, que obtuvo 10,4%⁹².

Su asesinato privó a la derecha del político más brillante que tuvo el sector en la segunda mitad del siglo XX. En su carrera política, con luces y sombras, como su colaboración con el régimen de Pinochet, formó una colectividad, la UDI, que demostró poseer considerables fortalezas de liderazgo, organizativas y apoyo popular, pues siguió desarrollándose, llegando hasta ser el principal partido político en las elecciones parlamentarias de 2001, demostrando haber tenido autonomía respecto de su principal figura, un importante indicador del desarrollo institucional de la colectividad (Huntington, 1968). En las elecciones presidenciales de 1999, su candidato, Joaquín Lavín, que había sido secretario general de la UDI, estuvo a escasos 31.140 votos de llegar a La Moneda. Esto obligó a una segunda vuelta en la que se impuso Ricardo Lagos (PS/PPD), el candidato de la Concertación, con el 51,31%, mientras que Lavín obtuvo 48,69%.

LA INAUGURACIÓN DE LA DEMOCRACIA SEMISOBERANA

La biografía política de Patricio Aylwin

La democracia semisoberana consta no solo de componentes institucionales y de decisiones de las élites, que analizaré en los capítulos siguientes, sino que también del protagonismo de sus presidentes, y de los cambios que experimentó el poder de estos, que concentraron una considerable autoridad al reunir las funciones de jefe de Estado y de gobierno. Es muy importante considerar el liderazgo del primer inquilino de La Moneda después del régimen militar, Patricio Aylwin, pues durante su gobierno se tomaron decisiones estratégicas que han definido el proceso político y el orden institucional, con sus luces y sombras.

Cuando Aylwin entró a La Moneda en 1990 era el dirigente de la oposición democrática al régimen de Pinochet con mayor experiencia política, reuniendo las condiciones requeridas para ser un buen presidente de la nueva democracia, que surgía en un contexto extraordinariamente difícil. Prestigioso abogado, catedrático de derecho administrativo de la Universidad de Chile¹, había sido senador (1965-1973), presidente de la Cámara Alta (1971-1972) y tenía una larga y exitosa trayectoria en su partido, llegando a ser presidente de la DC en seis oportunidades, en momentos muy significativos de la historia de la colectividad y del país. La primera vez fue en 1951-1952, cuando era Falange Nacional y Eduardo Frei Montalva hizo su primera incursión en la carrera presidencial². La segunda ocasión fue después de las elecciones presidenciales de 1958, cuando Frei obtuvo un prometedor 20,5% de los